



LA PAZ CON COLOMBIA

LUIS BRITTO GARCÍA



Colección
Ideas Claves



**LA PAZ
CON COLOMBIA**

LUIS BRITTO GARCÍA

LA PAZ CON COLOMBIA; Luis Britto García

Ministerio para el Poder Popular para la Comunicación y la Información;
Av. Universidad, Esq. El Chorro, Torre Ministerial, pisos 9 y 10. Caracas-Venezuela.
www.minci.gob.ve / publicaciones@minci.gob.ve

DIRECTORIO

Ministro de Comunicación e Información

Andrés Izarra

Viceministro de Estrategia Comunicacional

Yolanda Delgado

Viceministro de Gestión Comunicacional

Mauricio Rodríguez

Dirección de Publicaciones

Gabriel González

Diagramación

Ingrid Rodríguez

Diseño de portada

Adolfo Dávila

Edición

José Cuevas

Depósito Legal: Is8712008300525

Impreso en la República Bolivariana de Venezuela.
Febrero, 2008



PRESENTACIÓN

Este pequeño libro es una tremenda bitácora para quien quiere orientarse en el complicado camino que traza el tema Colombia en nuestro país. Esta compuesto de artículos que Luis Britto García ha ido publicando en distintos diarios y años. Se lleva el lector en cada artículo el pulso del momento político y una consecuente crítica desmitificadora y demoledora sobre acciones, hechos, palabras que afectan los intereses de dos pueblos hermanos. Sobre todo contra quienes fabrican una novela de intrigas cuyo objetivo se resume en estas palabras del autor: «el plan maestro de Estados Unidos es que Venezuela le pelee su guerra en Colombia, y que Colombia le entregue el petróleo venezolano». Precisamente, porque de claves como la que

contiene esta cita está lleno este libro, hemos considerado oportuno en los tiempos de hoy brindar a los lectores venezolanos una edición masiva que les permita comprender qué es lo que ocurre detrás de la trama de esta película de terror que nos quieren imponer los agentes del Imperio (a través de las empresas de comunicación, por supuesto) como el guión de una realidad que responderá siempre a los intereses de quienes son capaces de invadir a cualquier país del mundo cuando un gran botín está de por medio: los recursos energéticos y minerales, las tierras, el agua; y para ello requiere el Imperio derrocar a su gobierno bolivariano, su actitud soberana, su proyecto popular, revolucionario; su lucha por la paz y por la unidad de todos los pueblos hermanos, su tendencia anticapitalista, su antiimperialismo declarado.

LA PAZ CON COLOMBIA

A principios de los noventa salvé mi voto en un jurado que premió un guión cuya premisa era la inevitabilidad de la guerra entre Colombia y Venezuela. Un recluta venezolano (ratero, flojo y cobarde) y otro colombiano (noble, valiente y casto) se separaban de sus unidades y recorrían juntos una Venezuela pintada como un complejo de fábricas de armamentos y bases de las FARC. La calumniosa fábula se filmó con fondos venezolanos. Salvo de nuevo mi voto en el guión de guerra fratricida que nos quiere imponer George W. Bush. Las guerras se siembran en el imaginario y se cosechan en la realidad.

Por eso escribí en 2004 que “el plan maestro de Estados Unidos es que Venezuela le pelee su guerra en Colombia, y que Colombia le entregue

el petróleo venezolano". Parto de tres evidentes premisas: 1) La potencia que pille las reservas de hidrocarburos del mundo lo dominará durante el medio siglo que duren. Para ello Estados Unidos promovió la guerra entre Irak e Irán, invadió Afganistán e Irak y apoyó el golpe de Estado de 2002 en Venezuela. 2) Estados Unidos no puede movilizar los contingentes que tal empresa requiere: sus fuerzas son casi todas mercenarias. Si nos invaden, dejan Irak a los iraquíes. 3) Estados Unidos requiere carne de cañón de otros pueblos para sus latrocinios. Por eso se sirve del sicariato en Chiapas, de los paramilitares guatemaltecos y de los ejércitos hondureño y panameño para forzar el corredor estratégico del Plan Puebla-Panamá, el cual culmina en el enclave militar del Plan Colombia, el Plan Patriota y el Plan Victoria, que implican una ofensiva de 18 mil soldados colombianos y 800 estadounidenses y una inversión de siete mil millones de dólares, con la coartada de combatir la subversión y el objetivo de invadir América del Sur. Con razón afirma Chávez que "Colombia es

un país intervenido por Estados Unidos" el cual "está creando condiciones para generar un conflicto entre Colombia y Venezuela".

La invasión avisa. En el Plan Balboa, ejércitos de la OTAN se ejercitaron en dividir a Venezuela en dos países, previo el asesinato de su Presidente. Estados Unidos instaló en Curazao la base Hato Rey y la Reina Beatriz en Aruba; sus almirantes promueven el relanzamiento de la IV Flota del Caribe, con portaaviones nuclear incluido. El gobernador del Zulia, Manuel Rosales, abre el 2006 con una campaña secesionista. Otra campaña presenta a Venezuela como narcotraficante, a pesar de su rango de tercer país del mundo en decomisos de droga desde que se libró de la DEA. Canales opositores infaman al presidente Chávez como cocainómano por probar una hoja de coca, que es como tildarlo de alcohólico por comerse una uva. También difunden un borroso video cuyo comentario miente que el alcalde bolivariano de Maracaibo, Di Martino, entregaría armas a las FARC. El portavoz del Departamen-

to de Estado, Shannon, afirma que no hay tales suministros. Pero el vicepresidente colombiano Santos amenaza con secuestrar a Di Martino. Internet divulga instrucciones para la oposición venezolana sobre cómo ayudar al ejército de Estados Unidos en caso de invasión. Cuando los medios sueñan, intervenciones traen.

Guerra avisada sí mata soldado. Según el International Institute for Strategic Studies, para 2001 el ejército venezolano integra 82 mil efectivos; el de Colombia 138 mil. Según el World Economic Outlook, para 2005 Colombia presenta un gasto militar de 3.309 millones de dólares, el 3,8% de su PIB; y Venezuela menos de la mitad: unos 1.477 millones, el 1,6% de un PIB que asigna más de 9% a la Educación. En Venezuela concluyó la insurgencia armada con la masacre de Cantaura en 1982; la Hermana República lleva sesenta años de guerra civil ininterrumpida, e incrementa efectivos y gastos con las sucesivas movilizaciones del Plan Colombia. Venezuela compra en 2007 helicópteros de ataque, radares 3JYL-1, fusiles Kalas-

hnikovs, dos submarinos Lada, doce aviones de transporte AN-70, un sistema de defensa aérea S-300 con misiles tierra-aire, y 40 helicópteros. El ejército colombiano nos supera en armamento y número de combatientes. Pero si nos invade, deja Colombia en manos de las FARC.

Nuestra mayor fragilidad reside en el frente interno. Venezuela cuenta con 27.483.200 habitantes, Colombia, con 43.430.000. Es posible que unos cuatro millones de colombianos estén dentro de nuestras fronteras. La inmensa mayoría es gente honesta, trabajadora y pacífica. Pero entre ellos se infiltran paramilitares que cobran vacuna, montan alcabalas y suplantán al hampa criolla en el narcotráfico, la trata de personas, el préstamo usurario y el juego ilegal. Bingos y casinos son las cabezas de playa de legitimación de capitales de esta invasión del crimen organizado. Los paramilitares son la perfecta Quinta Columna para apoyar cualquier agresión internacional. Sus armas de gran potencia podrían quizá impedir nuestra movilización popular. Por el contrario, el número de

venezolanos dentro de Colombia es insignificante. Gracias al régimen de doble nacionalidad del artículo 41 de la Constitución venezolana, personas con nacionalidad colombiana pueden ocupar todos los cargos de nuestro ejército, y de nuestros ministerios de la Defensa, de Relaciones Interiores y de Relaciones Exteriores, salvo el de ministros. La Constitución de la Hermana República dispone en su artículo 97 que “El colombiano, aunque haya renunciado a la calidad de nacional, que actúe contra los intereses del país en guerra exterior contra Colombia, será juzgado y penado como traidor”. Nuestra Carta Magna no contempla ninguna norma que la equilibre o contrapesa.

Ni venezolanos ni colombianos queremos una guerra en la cual el único ganador sería Estados Unidos. Sobre la ruina de nuestros países intentaría robarnos unos hidrocarburos que dos movimientos de resistencia popular le impedirán explotar. Si Estados Unidos nos invade, pierde el mundo. La paz es la única victoria posible.

3-2-2008

VENEZUELA INVADIDA

Alerté en esta columna, el 25 de enero de 2004, que “el plan maestro de Estados Unidos es que Venezuela le pelee su guerra en Colombia, y que Colombia le entregue el petróleo venezolano”. El 9 de mayo de ese año Hugo Chávez Frías anunció la detención en Baruta de 130 paramilitares colombianos con uniformes militares venezolanos. Los menores fueron devueltos a su país; el resto fue indultado en 2007. El conflicto colombiano invade Venezuela.

¿Concluyó así la invasión de grupos armados? Parece que hubieran concluido nuestras medidas para controlarlos. Informa el general López Hidalgo que hay “paras” en siete estados (*Últimas Noticias*, 11-5-04, p.12). El 25-6-2006 el *Diario Vea* reseña que paramilitares colombianos ase-

sinaron a nueve campesinos al Sur del Lago. El 4-4-2007 añade que cuatrocientos mercenarios estadounidenses se concentran en la frontera frente a Apure. Jaime A. Moreno denuncia en *Rebelión* del 26-6-06 que los campesinos colombianos desplazados hacia el Sur del Lago son semiesclavizados por mafias extranacionales: "Los terratenientes, mafiosos paramilitares colombianos y los terratenientes escuálidos venezolanos, desarrollaron una unidad y complementariedad eficaz, se necesitan mutuamente: los primeros han encontrado en el Zulia agrícola el escenario 'perfecto' para acumular y legalizar capitales en tranquilidad; no cuentan con el acoso de la insurgencia guerrillera colombiana y la presión de los campesinos por rescatar su tierra, y se favorecen por el apoyo de los escuálidos que a su vez les conviene fortalecer su proyecto contrarrevolucionario, antibolivariano y secesionista". Diversas denuncias afirman que paramilitares cobran vacuna e instalan alcabalas en todos los estados fronterizos; Eleazar Díaz Rangel considera dichas

informaciones dignas de atención. El paramilitarismo invade nuestras fronteras.

La agencia EFE informa, el 12-6-2007, que las autoridades venezolanas incautaron en la frontera del Táchira 40 mil cartuchos de armas de guerra a dos paramilitares colombianos. ABN reporta el 13-6-2006 que, según la revista *Semana* aparecieron 14 nuevos grupos paramilitares en la Hermana República, y que "También en el departamento de la Guajira colombiana, se ha reportado la presencia y actividad de un grupo paramilitar conformado al menos por 70 efectivos armados, que formaron parte de la estructura del Frente Contrainsurgencia Wayúu de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)". Actualidad Étnica divulga el 19-7-2007 que "Desde el año 2002 el pueblo wayuú ha sufrido una arremetida por parte de los grupos paramilitares, que según voceros wayuú siguen operando en Maicao y en la Guajira. Violación y ensañamiento contra las mujeres, secuestros, más de 200 homicidios, desplazamientos masivos y pérdida de bienes son los casos que más afectan a los wayuú",

y añade que “Para su defensa, los wayuú siempre han hecho uso de las armas y algunas veces para dirimir conflictos internos”. El paramilitarismo invade la sociedad fronteriza.

El 16-12-2007 el diario *Panorama*, basándose en “fuentes de completa confianza” revela que “En Venezuela, el paramilitarismo tiene su punta de lanza en Maracaibo”, con las bandas Águilas Negras, Águilas Azules y Águilas Rojas y que desde 2004 terratenientes de Machiques contrataron al coronel colombiano Novoa para que les entrenara mercenarios. Añade que opera en Zulia el heredero del imperio criminal del capo colombiano “Jorge 40”, Miguel Villarreal, alias “El Salomón”, jefe de las Águilas Azules y Rojas, quien controla el contrabando de gasolina hacia Colombia. El paramilitarismo invade nuestro principal estado petrolero y ganadero, codiciado objetivo de diferendos fronterizos y complots de secesión.

¿Se trata de un pleito de remotas fronteras, de caminos verdes y monte y culebra? El 13 y 14 de diciembre de 2007, Eligio Rojas resume en *Últimas*

Noticias el informe anual de Provea según el cual narcotraficantes y paramilitares actúan unidos en lugares como El Valle, Petare y el Mercado Mayor de Coche, donde “estos grupos son financiados por los comerciantes y camioneros de la zona”. Testigos presenciales les atribuyen prácticas de tiro en San Blas y la Fila de Mariches. El paramilitarismo invade la capital.

Cuatro industrias explota la delincuencia en los sectores populares: la trata de personas, el narcotráfico, el préstamo usurario y el juego. Mi servicio secreto me confirma que en todas los paracos sustituyen en forma acelerada al hampa criolla. Bandas con entrenamiento militar, organización militar, armamento militar y financiamiento del crimen organizado desalojan a simples rateros, cobradores de peaje o arrebataadores de celulares. Según mis fuentes, en el Zulia los paramilitares desbancaron al hampa criolla que prestaba dinero a los buhoneros con intereses del 20% mensual, bajando las tasas a 10%. La página colombiana *El Tiempo.com* de 2 de julio de 2005 demuestra que los paracos

lavan sus capitales en los países vecinos mediante “Contrabando de gasolina, arroz, electrodomésticos y vehículos, transporte público (colectivos y mototaxis), juegos de azar (chance y casinos), confecciones, construcción y prostitución”. Los casinos, repetidamente denunciados por el presidente Chávez, son la herramienta de legitimación de capitales de este ejército que asalta nuestros suburbios y controla sus accesos. Sólo han podido expulsar a la carroña narcocasinera los militantes de la Coordinadora Simón Bolívar, el grupo Alexis Vive del 23 de Enero, y los grupos cívicos de Propatria. Si otros movimientos no los imitan, es posible que en el caso de un nuevo 11 de abril los sectores populares no pudieran movilizarse. El paramilitarismo invade nuestras bases sociales.

La Hermana República está ocupada por Estados Unidos, y comienza un año en el cual los presidentes gringos asaltan países como propaganda electoral. La invasión está en marcha, y no la detendremos ignorándola ni amnistiándola.

6-1-2008

NO ME IMAGINO AL PRESIDENTE CHÁVEZ PROMOVIENDO CASINOS

Repetidamente denuncia Hugo Chávez Frías que Estados Unidos prepara la intervención en Venezuela.

Toda intervención opera en etapas: 1) acoso comunicacional, 2) instauración de quintas columnas, 3) legitimación de estas quintas columnas por los países a ser invadidos, 4) violación sistemática de las leyes por los infiltrados, 5) agresión militar.

Ejemplo, la anexión estadounidense del estado mexicano de Texas: 1) Los medios yankis escandalizaron exigiendo intervención en Texas, 2) EEUU infiltró bandas de pistoleros y aventureros en territorio tejano, 3) El Congreso mexicano le-

galizó la invasión de tres centenares de familias yankis asignándoles gratuitamente 30 mil hectáreas, 4) Los invasores violaron la ley mexicana contra la esclavitud apoyados por el presidente estadounidense John Tyler, quien afirmó que “La sola probabilidad de que pueda abolirse la esclavitud sobre tierras vecinas, ha de ser motivo suficiente para que procedamos a anexarlas”, 5) Los invasores instalaron un enclave militar en El Álamo; una milicia pertrechada por EE UU y encabezada por el aventurero Stephen Austin derrotó a los mexicanos; éstos fueron despojados de Texas y, luego, de más de la mitad de su territorio, de sus bienes privados, vendidos como esclavos y linchados. Verifiquemos cómo se cumple el plan anexionista en Venezuela.

1) ¿Sufrimos acoso comunicacional? Todos, excepto Conatel, sabemos que los medios estadounidenses y la mayoría de los venezolanos escandalizan exigiendo la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

2) ¿Nos infiltran pistoleros y aventureros? Reiteradas denuncias señalan que paramilitares colombianos cobran impuestos propios en Táchira, y al parecer, también en Zulia, Barinas, Apure y Bolívar. Jaime A. Moreno denuncia en *Rebelión* del 26-6-06 que los campesinos colombianos desplazados hacia el Sur del Lago son semiesclavizados por mafias extranacionales: “Los terratenientes, mafiosos paramilitares colombianos y los terratenientes escuálidos venezolanos, desarrollaron una unidad y complementariedad eficaz, se necesitan mutuamente: los primeros han encontrado en el Zulia agrícola el escenario ‘perfecto’ para acumular y legalizar capitales en tranquilidad; no cuentan con el acoso de la insurgencia guerrillera colombiana y la presión de los campesinos por rescatar su tierra, y se favorecen por el apoyo de los escuálidos que a su vez les conviene fortalecer su proyecto contrarrevolucionario, antibolivariano y secesionista”. ¿Duda usted? *Diario Vea*, del 25-6-06, informa que “las autoridades confirman que fue un gru-

po de paramilitares colombianos el que asesinó a nueve campesinos en un paraje en El Vigía, a 10 kilómetros del sector El Colibrí, en el sur del Lago". También fue ultimada Lucía di Lucca, al parecer por venganza de paramilitares contra un decomiso de cocaína efectuado por su padre, el coronel Roberto di Lucca. Los bolivarianos del 23 de Enero desalojaron a los narcotraficantes: hace una semana fue asesinado un militante bolivariano, aparentemente por vengativos paracos.

3) ¿Legitimamos a estas quintas columnas? Ni controlamos los capitales que se lavan en Venezuela ni sancionamos el juego ilegal de acuerdo con el *Código Penal*. Por el contrario: abra usted la página web de la Asamblea Nacional y descubrirá que el diputado Hermes García (Podemos/Sucre) clama por legitimar los casinos porque "la nación deja de percibir 400 mil millones de bolívares debido a que no existe una ley tributaria de juegos de envite y azar". Si tal cifra representara un impuesto de 10% sobre lo jugado, para recaudarlo (suponiendo que el

hampa organizada pague tributos) sería indispensable que los venezolanos perdiéramos 4 mil millones de bolívares en dichos antros. Sin considerar que tales juegos, según confiesa el bienintencionado Hermes, también causan "desintegración familiar, disminución del rendimiento estudiantil y laboral, divorcios y hasta suicidios". Congresistas mexicanos regalaron 30 mil hectáreas a pistoleros que invadían su país: algunos asambleístas quieren legitimar por la puerta grande de la Asamblea Nacional el lavado de capital del hampa organizada que causa desde desintegración familiar hasta suicidio.

4) ¿Violan la Ley los infiltrados? Juzgue usted: lavado de capitales, opresión terrorista sobre campesinos desplazados, cobro de "impuestos", sicariato, monopolio del narcotráfico, el préstamo usurario y el juego ilegal, que según la empresa International Gaming Holding supera en Venezuela al legal en 80%. Gracias a sus actividades, Estados Unidos nos descertifica con un colmudo tercer lugar en trata de personas.

Aproveche, diputado Hermes: calcule ya cuánto reportaría un impuesto sobre la prostitución infantil. Si tan desesperados están por cobrar tributos, ¿por qué no los recaudan de las empresas y ciudadanos de Estados Unidos, exonerados de pagarlos en Venezuela por los Tratados contra la Doble Tributación?

5) ¿Viene la intervención militar? En su discurso del 184 aniversario de la Batalla de Carabobo, el general Raúl Baduel colocó entre las hipótesis de guerra la “extensión del conflicto regional (Plan Colombia-Andino)” combinada con agresión de Estados Unidos. Pues la potencia norteaña prefiere siempre valerse de milicias de otros países para sus latrocinios. Ya sacrificó unidades del ejército colombiano para su agresión contra Corea; negros e hispanos son el componente esencial de sus tropas en el Golfo. Crimen organizado y paracos serían la quinta columna electiva y la carne de cañón de una intervención que reportaría un botín petrolero más rico que el de Irak.

“No me imagino al presidente Chávez promoviendo casinos”, declara Eva Golinger en Radio Nacional la madrugada del 29 de junio. Yo tampoco. Los únicos que sueñan con tal cosa son los paracos y sus agentes. Si los legalizamos, terminarán ilegalizándonos. O los expulsamos, o nos expulsan.

31-6-2006

¿MISIÓN CASINO ADENTRO?

Siete años llevamos esperando la Ley de Policía Nacional que desbande los ejércitos privados con los cuales los emperadores aldeanos motorizan guarimbas y golpes de Estado. Igual tiempo aguardamos por la Ley que devuelva a los trabajadores las prestaciones sociales arrebatadas por Petkoff, Fedecámaras y la CTV de Carlos Ortega. Cuatro años transcurren sin que se sancione la Ley de Educación que regularía las relaciones del Ministerio con las nuevas instituciones docentes. En cambio, dos semanas sobraron a Conatel para autorizar a las transnacionales a hacer propaganda de alcohol violando la *Ley Resorte*, y con celeridad de cohete se dispara en la Asamblea Nacional el proyecto de *Ley de Juegos de Envite y Azar* que legaliza casinos, timbas y garitos para cobrarles

impuestos. El pueblo puede esperar indefinidamente, la caña y los tahures no hacen antesala. La promoción del vicio parece ser el único acelerador eficaz de nuestras reformas normativas.

Nadie queda mal desde que se inventaron las excusas, pero las de los poderes públicos los hacen quedar peor. Argumenta el diputado Hermes García, que “los recursos que se obtienen de la recaudación de este gravamen representan, precisamente, la remuneración del costo que para la sociedad supone la previsión de servicios públicos destinados a atender los problemas que generan los establecimientos que estimulan los juegos de envite y azar”. Si el bazuco crea problemas, en vez de prohibirlo cobra un impuesto. Añade Hermes: “Según estudios realizados por investigadores de prestigiosas universidades y centros de investigación de Gran Bretaña, Estados Unidos y España, la proliferación de ésta está originando graves y diversos problemas sociales, tales como desintegración familiar, disminución de rendimiento estudiantil y laboral, divorcios

y hasta suicidios”. Si algo causa desde suicidio hasta desintegración familiar, debe la Asamblea Nacional legalizarlo.

Leyó usted bien: legalizarlo. El *Código Penal* vigente tipifica en su artículo 532 el juego de suerte, envite o azar en sitio abierto al público como falta punible con arresto hasta de dos meses y confiscación del dinero y objetos destinados al efecto. La vergonzosa Ley de Bingos y Casinos autorizaría dichos juegos sólo en hoteles cinco estrellas, de más de doscientas habitaciones, en zonas turísticas y previo referéndum efectuado con los vecinos. Hasta donde sé, ni uno solo de los casinos en nuestro país cumple con tales requisitos. Su incontrolada proliferación es testimonio viviente de ineptitud o complicidad de las autoridades. Gracias a ella, según estudio de la empresa International Gaming Holding, en Venezuela los juegos ilegales superan a los legales en 80%. El director de una encuestadora que me pide reservar su nombre verificó que los estratos menos favorecidos pierden 30% de sus ingresos

en juegos de azar. Vielma Mora declara para la página de RNV que “a través de la *Ley de Bingos y Casinos* se recaudan 10 millardos de bolívares al año”. Cuánto hay para cada fracaso, cada desintegración familiar, cada suicidio. Que el pueblo pierda un millón, si se recauda un bolívar. Y seguramente no se recaudará nada, pues los promotores de casinos son extranjeros que no pagan impuestos en Venezuela gracias a los Tratados contra la Doble Tributación.

Entérese: los promotores de garitos no son hermanitas de la caridad ni contribuyentes ni venezolanos. La página colombiana *El Tiempo.com* de 2 de julio de 2005 titula que “Paramilitares se infiltraron en las economías regionales”. Y demuestra que “Hay ‘paras’ dedicados a lavar capitales a través de negocios que hace rato trascendieron las inversiones en tierras y ganado, sus economías tradicionales. Contrabando de gasolina, arroz, electrodomésticos y vehículos, transporte público (colectivos y mototaxis), juegos de azar (chance y casinos), confecciones, construc-

ción y prostitución hacen parte del portafolio de autodefensas y narcotraficantes, sea que se entiendan como dos grupos distintos o como uno solo”. El reportaje prueba que su legitimación de capitales a través de estas industrias alcanza al Departamento Norte de Santander y países vecinos. Adivine cuál les queda más cerca.

Hace meses denunciemos la penetración de paramilitares colombianos en las zonas populares mediante el narcotráfico, los préstamos usurarios y el juego. Las tres industrias son ilegales: las autoridades no deberían tolerar ninguna. Desde entonces autorizadas denuncias advierten que en Táchira los paracos sistemáticamente recaudan impuestos de la indefensa población civil. Eleazar Díaz Rangel, entre otros, estima que las denuncias merecen crédito e investigación. Otras voces alertan que este Estado paralelo se extendería al Zulia, Apure y el Estado Bolívar. Digo bien Estado: los paracos imponen tributos como un Poder Legislativo, los recaudan de manera regular bajo amenaza de sanción coercitiva como un Poder Ejecutivo, y

dictan sentencias de muerte, más inapelables que las de cualquier Poder Judicial. Entre ellas, las que recayeron sobre centenar y medio de dirigentes campesinos asesinados, y la que truncó la vida inocente de Lucía di Lucca, casi seguramente muerta para vengar el cumplimiento del deber por su padre, el coronel Roberto Lucca. Si algo requiere acción militar pronta, eficaz y ejemplarizante es la agresión contra la soberanía por un ejército irregular dotado de recursos y procedimientos de hampa internacional, y con base en un país hermano con el cual lamentablemente arrastramos diferendos fronterizos históricos y en el cual Estados Unidos fomenta una carrera armamentista.

La ideología de la motosierra no se combate legalizándole casinos, legitimándole garitos y fingiendo que se cobrará tributos a sus recaudadores de vacuna. Venezuela no puede volverse Zona de Tolerancia. Cañandongas y casinos no son nuestras primeras necesidades. Una revolución puede ser de todo, menos cabrona.

18-6-2006

PARAMILITARES, PARAPOLÍTICA, PARABINGOS, PARACASINOS

En su discurso del 19 de abril para juramentar los promotores del Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente Hugo Chávez Frías condenó que en el país haya “burdeles y casinos como si fuera una sociedad de qué”, para luego prometer “Vamos a sanarnos de tanto vicio que nos inyectaron desde hace tanto tiempo”.

Contradictoriamente, en la Asamblea Nacional avanza un proyecto para legalizar a los casinos cobrándoles impuestos.

Se trata de elegir entre dos proyectos de sociedad: el bolivariano, y el del hampa organizada legitimada. Examinemos el segundo.

Los paramilitares no son la solución, sino el problema.

¿Habrá algo más tentador que armar malandros, encargarles matar a quien molesta, y devolverlos a casa dándoles las gracias?

Pero puede ser que el sicario prefiera cometer crímenes en su provecho. A lo mejor quiere volverse amo.

Y en lugar de volver a casa, se mude para otro vecindario indefenso que le abra las puertas.

Desdichado pájaro, que entrega su país a los paramilitares.

Pobre Venezuela, que prepara una ley suicida para legalizarles sus aparatos de legitimación de capitales provenientes de delitos.

Los paramilitares no pueden combatir al pueblo armado.

En el web site colombiano *Seguridad y democracia*, Alfredo Rangel apunta que a pesar de su atroz intervención, "El Estado está muy lejos de haber debilitado de manera significativa a la guerrilla, en particular a las Farc. Lo más significativo se ha logrado en Cundinamarca y aún no se ha consolidado. Peor aún, en las pocas zonas

abandonadas por la guerrilla en su repliegue o porque han sido corridas por la Fuerza Pública, hay una creciente presencia paramilitar. En muchas zonas la guerrilla está al acecho esperando que los paramilitares se desmovilicen".

Los paramilitares sólo asesinan pueblo desarraigado.

La agencia AFP de Bogotá informa, el 14 de abril de 2007, que 48.250 de sus víctimas se han registrado ante la Fiscalía.

El Tiempo añade que a diario, ante las fiscalías, acude casi un millar de personas para denunciar sus crímenes.

Un informe de la Fiscalía revela que sólo contra el jefe del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Rodrigo Tovar, cursan seis mil denuncias.

Los paramilitares copan el narcotráfico. Incapaces de ganar guerras, acaparan el crimen organizado.

Los diarios colombianos recogen las confesiones del narcotraficante Hernando Gómez Busta-

mante (alias Rasguño), detenido en Cuba y entregado a Colombia, cuyo computador “podría contener las pruebas que vincularían a algunos de los jefes desmovilizados de las AUC, detenidos en la cárcel de Itagüí, con actividades de narcotráfico posteriores a la dejación de las armas” (*El Colombiano*, 23-3-2007: 8).

No es poco lo que rasguña: le decomisaron un Ferrari deportivo, un fusil enchapado en oro, regalo del capo narco mexicano Armando Carillo «el Señor de los Cielos», dos cuadros de Rubens por los cuales pagó 8 millones de dólares, dos mil cabezas de ganado brasileño, caballos de paso y dos aviones de los ocho que poseía.

Los paramilitares mandan mediante la parapolítica.

Montan el Estado invisible del crimen organizado. Los paramilitares asesinan o promueven candidatos.

El jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Iván Roberto Duque Gaviria, confesó que

una alianza entre militares, el DAS y el B-2 (antiguo servicio de inteligencia militar) y mafiosos asesinó al candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989.

El comunicativo «Rasguño» confiesa que “Manejé 203 congresistas y unos ocho alcaldes del norte del Valle. (...) Otros alcaldes los manejó Davinson (su lugarteniente extraditado hace 48 horas). (...) Cada mes giraba hasta 500 millones de pesos (...). Lo usaban para pagar en Fiscalía, Policía. La idea era tener oídos en todas partes para estar preparados para operativos”.

Su cómplice Ignacio Londoño habría manejado los aportes para la campaña de Ernesto Samper y de Horacio Serpa, “la más costosa del país”.

Concluye Alfredo Rangel que “Su involucramiento en toda suerte de acciones ilegales para conseguir recursos —robo de gasolina, extorsión, secuestro, etc.— los ha dotado de una infraestructura criminal muy poderosa.

Su penetración en toda suerte de instituciones del Estado y el condicionamiento de los proce-

sos electorales para elegir candidatos afectos y rechazar adversarios, les ha provisto de una gran influencia política en todos los niveles de las decisiones públicas”.

Los paramilitares compran la impunidad.

Sicarios que asesinan o eligen mandatarios se hacen inmunes a ellos.

El gobierno colombiano sancionó el decreto 128, en virtud del cual libertó a más de 30 mil paramilitares sin investigarlos.

Para los culpables de delitos no indultables ni amnistiables, como crímenes de guerra o de lesa humanidad, la ley 975 preveía penas privativas de libertad menores de 18 meses, más la prohibición de acercarse a sus víctimas.

El decreto 3.391 del año 2006 permitió rebajar más las penas.

Los paramilitares se apoderan del país que les abre las puertas.

«Rasguño» confiesa que “Venezuela es el templo del narcotráfico. Hay una conjugación de

venezolanos, colombianos, brasileños. Es muy fácil traficar porque allá no consiguen a nadie” (*El Colombiano*, 23-3-2007: 8).

En ese templo preparaban un magnicidio y liquidaron centenar y medio de dirigentes campesinos.

La página colombiana *El Tiempo.com* de 2 de julio de 2005 demuestra que los paracos lavan sus capitales en los países vecinos mediante “Contrabando de gasolina, arroz, electrodomésticos y vehículos, transporte público (colectivos y mototaxis), juegos de azar (chance y casinos), confecciones, construcción y prostitución”.

Parapolítica, paracasinos y parabingos: es el proyecto social que intenta legitimar el Proyecto de *Ley de Impuesto a las Actividades de Juegos de Envite y Azar*.

O Socialismo del Siglo XXI, o “País de qué”. ¿Y qué “país” sería!

Una vez más, elijamos.

15-4-2007

¿BINGOS Y CASINOS SON NUESTRAS PRIMERAS NECESIDADES?

— *No he tenido suerte para el juego y el azar, así que no me gusta eso*—, declaró Hugo Chávez Frías en el *Aló Presidente* del 21 de enero de 2007. Otros mandatarios lo precedieron. Bolívar enfiló su más áspero regaño contra un sobrino apostador. El 19 de septiembre de 1827 consignó su alarma por ser “repetidas las quejas que ha recibido el gobierno sobre el escándalo que se da en algunos lugares de la República tolerándose que en varias casas haya juegos prohibidos, quedando impunes los que cometen este delito”, quienes merecerían ser “castigados hasta con la pena de presidio”. Siguiendo al Libertador, el *Código Penal* vigente sanciona en su artículo 532 el

juego de suerte, envite o azar en sitio abierto al público con arresto hasta de dos meses y confiscación del dinero y objetos destinados al efecto. Por Ley, todos sus promotores deberían estar presos y sus instrumentos delictivos confiscados. No lo digo yo, lo afirma el Superintendente Tributario en entrevista para Carlos Croes en *Quinto Día*: "Para mí, como Superintendente no hay ningún casino legal, ningún bingo legal". ¿Por qué entonces funcionan en Venezuela?

Ningún presidente de la Cuarta República alcahueteó garitos. Betancourt prohibió en 1945 bingos y apuestas con la pelota vasca. Ni el represivo Leoni ni el endeudador Carlos Andrés ni el desastroso Lusinchi se rebajaron a entregar Venezuela en manos de tahúres y rufianes. Por el contrario: Luis Herrera Campins prohibió la propaganda de alcohol y tabaco y la retransmisión de carreras de caballos por los medios, enfrentando valerosamente un veto comunicacional que dura hasta hoy.

Sólo el nauseabundo Congreso del segundo mandato de Caldera expidió a fulleros y embaucadores la patente de corso llamada Ley para el control de los casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles. Sus propias disposiciones descalifican este monumento a la corruptela. Según sus artículos 9 y 11, los tahúres pagan los sueldos de la Comisión encargada de controlarlos, que es como encomendar a los delincuentes los salarios de la policía. Su artículo 38 establece un impuesto de 10% sobre los casinos y de 12% sobre los bingos, tasas inferiores a las que pagamos los ciudadanos productivos. No falta el toque cínico: según su artículo 21, gerentes y miembros de la Junta Directiva de un Casino o Sala de Bingo, deberán ser "personas de reconocida solvencia moral". La moral del tahúr sólo supera a la de quien lo alcahuetea. Con ardiente nacionalismo, el artículo 15 limita a 80% la participación del capital extranjero, a sabiendas de que éste no pagará ningún impuesto gracias a los tratados contra la doble tributación. Nos entregó al hampa organizada a cambio de nada.

El lector sabe que no se puede legitimar con impuestos, contravenciones al *Código Penal*. Ni el magnicidio ni el juego de envite y azar en locales públicos pueden ser despenalizados cobrándoles impuestos. Pero esto es precisamente lo que pretende el Proyecto de Ley de impuesto a las actividades de juegos de envite y azar, actualmente promovido en la Asamblea Nacional. Su artículo 10 eleva hasta 20 y 40% los tributos que deberían pagar bingos y casinos. También ignora o finge ignorar que sus propietarios, mafiosos gringos o paracos desmovilizados, están inmunizados contra cualquier impuesto venezolano por los tratados contra la doble tributación, y que ninguna apuesta deja recibo ni comprobante.

¿Conoce la Asamblea Nacional los efectos de la proliferación de bingos, casinos y garitos en Venezuela? Sí: en su "Estudio sobre el Impacto Económico" del Proyecto antes citado, resume la investigación del profesor de la Universidad de Illinois, Earl Grinois, quien señala que los problemas derivados del juego cuestan casi la

mitad de los causados por el abuso de la droga en los Estados Unidos. Demuestra que el juego implica costos sociales como el aumento del crimen, la pérdida de tiempo de trabajo y bancarrotas y dificultades financieras para las familias del adicto, que cuestan a la economía 54 mil millones de dólares anuales. Los juegos de casino causan costos sociales por 289 dólares por cada 46 dólares de beneficio económico. La National Gambling Study Comisión añade que a mayor oferta de juegos, más casos de ludopatía o apuestas compulsivas. En España, sólo en juegos legales el pueblo pierde 25.130 millones de euros cada año. David Phillips, profesor de sociología de la Universidad de California, verifica que "los suicidios en ciudades con juegos son hasta cuatro veces mayores que en ciudades comparables clasificadas donde el juego no es legal". Goodman de Roberto afirma que los jugadores con problemas presentan una tasa de suicidio cinco a diez veces mayor que el resto de la población. Durand Jacobs

asevera que cerca de 13% de los jugadores rompen las leyes para pagar por sus hábitos de juego o cancelar deudas. Kenneth Nelson concluye que “El hurto y la malversación del empleado están entre los crímenes más evidentes cometidos con frecuencia por los jugadores empedernidos”. Un estudio de SMR Research Corp. demuestra que la tasa de bancarrota es 18% mayor en condados con facilidades de juego, y 23% mayor en condados con cinco o más instalaciones de ese tipo.

¿En cual de los motores del Socialismo del Siglo XXI entra el deliberado fomento de crímenes, hurtos, malversaciones, bancarrotas y suicidios? ¿Se activará con ruletas el motor Moral y Luces? En la página colombiana *El Tiempo.com* de 2 de julio de 2005 se demuestra que los paracos lavan sus capitales invirtiendo en los países vecinos en transporte, prostitución y “juegos de azar (chance y casinos)”. Mientras, 400 mercenarios estadounidenses se concentran en el fronterizo departamento del Arau-

ca. Desdichado país el que legitima al crimen organizado. Ya estamos invadidos. O Bolívar y Chávez, o Larry Tovar Acuña. O Moral y Luces, o casinos y dictadura del hampa. Elijamos.

LA INTERVENCIÓN DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA

Conversión del ejército en policía antidrogas

Las doctrinas estratégicas de fin del siglo XX enfatizan la misión de defensa de soberanía de los ejércitos latinoamericanos, y les asignan la misión residual de resolverle a Estados Unidos sus problemas policíacos con el narcotráfico. Pues —según el *Documento de Santa Fe II*— Estados Unidos “no puede permitir que (a los países latinoamericanos) los esclavicen el narcotráfico, los terroristas o el Estado expansivo”. Adviértase cómo terrorismo y narcotráfico son gratuitamente asimilados al “Estado expansivo”, categoría en la cual en justicia deben estar comprendidos los sectores públicos de los países

desarrollados, que consumen de 40% a 50% del PIB de éstos. El tráfico de drogas es invocado así como nueva excusa para la intervención, al punto de que “la posibilidad de tener que utilizar fuerzas militares norteamericanas para combatir esta amenaza se discute ahora públicamente ante los comités congresionales”. Y para darle visos de verosimilitud a dicha posibilidad, el mismo documento asimila rebelión política y tráfico de estupefacientes:

Los narcotraficantes ya han destruido de manera eficaz el sistema legal de Colombia, mediante la intimidación y el soborno masivo del aparato judicial y la policía. Con recursos que pueden llegar a ser de 9 mil millones de dólares anuales, obtenidos a través de la venta de narcóticos ilícitos, fundamentalmente en este país, los señores de la droga fácilmente se pueden dar el lujo de mantener su privilegiada situación. Y para empeorar las cosas, los guerrilleros colombianos y los carteles de la cocaína operan juntos para hacer avanzar sus objetivos en ocasiones contradictorias (*Santa Fe II*, 1988).

La tarea de resolver su problema interno de drogas debería desarrollarse dentro del ámbito estadounidense: las autoridades de dicho país la dan por imposible, para justificar así el tratar de resolverla en otros países. A pesar de que el mismo *Documento de Santa Fe I* reconoce que “EEUU necesita dar el ejemplo con su propio sistema de cumplimiento judicial reduciendo la demanda interna”, también concede que “el año pasado, los norteamericanos invirtieron más dinero en la importación ilegal de drogas desde América Latina que en alimentos”. El mercado anual de la cocaína moviliza en Estados Unidos cerca de 400 mil millones de dólares al año; su clientela excede con mucho los 20 millones de consumidores y los cuatro millones de dependientes. No conviene investigar muy arriba. Entre los detenidos por consumo figuró una vez el alcalde de Washington. Entre los traficantes, la plana mayor de la Casa Blanca protagonista del escándalo “Irangate”, comandada por Oliver North, subordinado directo y fiel ejecutor de las órdenes del para entonces vicepresidente George Bush.

Incapacitados para combatir el flagelo en su propio país, los estadounidenses se proponen, sin embargo, erradicarlo en América Latina. Para tan noble objetivo sólo exigen que las fuerzas armadas de ésta sean puestas a su disposición, a través, de nuevo, de la complaciente mediación de la OEA. Pues, según la Propuesta nº 10 del *Documento de Santa Fe II*: “La participación de la OEA en los asuntos de seguridad y narcotráfico provee a EEUU de los mejores medios para librar una guerra cooperativa y exitosa contra los imperios del crimen que amenazan a todo el hemisferio”.

No faltan supuestos planes de ayuda para articular esta intervención militar de hecho. Por ejemplo, la Iniciativa Regional Andina moviliza, el año 2002, asistencia financiera estadounidense por un monto de 800 millones de dólares costear “programas antinarcóticos”, facilitar la “cimentación de instituciones democráticas” y ofrecer “asistencia de desarrollo” para los países comprometidos en ella: Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia y Brasil. Cerca de la mitad

de tal “ayuda financiera” se invierte en materia de seguridad y “ejecución de la ley” deja entrever, lo cual revela que el objetivo del plan consiste en reforzar y extender las capacidades militares y de vigilancia policíaca desde Panamá hasta Bolivia invocando la “lucha contra las drogas”. Prolongaciones de esta supuesta Iniciativa son el Plan Colombia y el Plan Puebla-Panamá (Schmitt, 2003).

Diversos países se oponen a prestar sus ejércitos para esta función subordinada en políticas sostenidas y coherentes. Así, en la IV Conferencia de ministros de Defensa de las Américas, en octubre de 2000, el presidente Fernando Henrique Cardoso negó la involucración de sus fuerzas armadas en la lucha antidrogas, y ante el Plan Colombia, desarrolló el Plan Cobra, para evitar que aquél afecte a la Amazonía, y el Plan Calha Norte para cerrar la frontera a guerrilleros y traficantes (Zibechi, 2005: 12). Venezuela rechazó desde 2006 la colaboración con la DEA, y desde entonces sus decomisos de droga han aumentado considerablemente.

En fin, Estados Unidos se propone crear ejércitos subordinados a partir de supuestas organizaciones antidrogas. James Petras afirma que “en México, Bolivia y Colombia, la embajada y el Departamento de Estado de los EEUU deciden qué oficiales del ejército y qué ministros son aceptables y cuáles deberían ser despedidos. Y como si de una orden de servicio se tratara, los altos cargos de los respectivos ejecutivos acatan sus decisiones” (Petras, 2004: 15). No necesariamente tales pareceres han de tener un acatamiento automático, pero es evidente que sí deben revestir significativo peso.

Tras la invasión de Panamá y la disolución de su Ejército de acuerdo con los planes del *Documento Santa Fe II*, la gran potencia intenta prolongar su presencia militar con una fuerza bajo su comando disfrazado de un “Centro Multilateral Antidrogas”, iniciativa que no prosperó. Con la firma del Convenio Salas-Becker con EEUU y un posterior acuerdo de la Autoridad del Canal, la posibilidad queda, sin embargo, abierta (Leis, 2003: 29).

Constitución de fuerzas interamericanas de intervención

Esta postulación es el desarrollo de una doctrina constante de la política de Estados Unidos. En 1914, articuló un proyecto de Fuerza de Intervención Latinoamericana contra Venustiano Carranza. En 1965, tras la invasión a la República Dominicana, intentó integrar en dicho país una Fuerza Interamericana de Paz, con efectivos enviados por las dictaduras de Brasil, Nicaragua, Paraguay y Honduras. Según señala Virgilio Rafael Beltrán, “La FIP permitiría a los EE UU tener una fuerza bajo su control político indirecto (la OEA) y, con toda seguridad, bajo su mando y abastecimiento, dada su superioridad técnica y logística. En este supuesto, contaría con una fuerza móvil apta para emplear en operaciones de contrainsurgencia sin necesidad de hacer los gastos del PAM respecto de una veintena de ejércitos”. Añade Beltrán que esta línea de acción ha sido resistida desde sus inicios por la mayoría de los países de América Latina, como sucedió en Buenos Aires en 1966 (Beltrán, 1970: 47).

A mediados de 1999, Estados Unidos presiona diplomáticamente para involucrar a Panamá, Ecuador, Perú y Venezuela en la contienda colombiana. En la cumbre de Margarita promovió de nuevo la recluta de un contingente latinoamericano para “operaciones de mantenimiento de Paz”, bajo comando de la ONU y coordinación de España, propuesta que afortunadamente no prosperó. El plan, sin embargo, sobrevive en hibernación para intentar resucitar en cada evento diplomático, en cada crisis. Así, el presidente Uribe Vélez propone en 2004 iniciar el Plan Patriota con una fuerza multinacional de 15 mil soldados en el sur de Colombia (Ruilova Quezada, 17-5-2004).

Intervención disfrazada de ayuda

Vimos que, de hecho, la lucha antidroga que Estados Unidos no cumple dentro de sus fronteras es la perfecta excusa para intervenir fuera de ellas. Modelo de invasión militar disfrazada de operación antinarcóticos es el llamado Plan Colombia, que incluye una variedad de opera-

ciones que interfieren con la soberanía del país intervenido.

Según confiesa el Departamento de Estado “El apoyo de Estados Unidos al Plan Colombia es una respuesta integral a una estrategia comprehensiva. Tanto el Plan Colombia como la ayuda de Estados Unidos son aproximaciones multifacéticas que incluyen desarrollo alternativo y asistencia para los desplazados; mejoras en la capacidad gubernamental y protección de los derechos humanos básicos, respaldo al proceso de paz colombiano y apoyo a los vecinos de Colombia; erradicación de cultivos ilícitos e interdicción de drogas ilícitas” (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2001: 7).

Ahora bien, la asistencia para los desplazados y la mejora de la capacidad gubernamental, que incluiría una “reforma del sistema judicial”, una “reforma de políticas: Código Penal” y un “apoyo adicional para la ejecución de la ley colombiana” (Ibidem, 32-36), así como la protección de los derechos humanos, entre otras materias, corres-

ponden única y exclusivamente al gobierno de la Hermana República. Sin embargo, la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos formulada por George W. Bush en 2002 insiste en considerar el problema como propio:

En cuanto a Colombia, reconocemos el vínculo que existe entre el terrorismo y los grupos extremistas que desafían la seguridad del Estado, y el tráfico de drogas, que ayuda a financiar las operaciones de tales grupos. Actualmente estamos trabajando para ayudar a Colombia a defender sus instituciones democráticas y derrotar a los grupos armados ilegales, tanto de izquierda como de derecha, mediante la extensión efectiva de la soberanía a todo el territorio nacional y la provisión de seguridad básica al pueblo de Colombia (Bush, 2002).

La endeblez de tales coartadas queda en evidencia si se considera que la guerra contra las drogas elige como campo de batalla un país donde surgen grupos armados radicales, y no el territorio de Estados donde operan los finan-

cistas, promotores, distribuidores, lavadores de capitales y en definitiva los consumidores que hacen posible el tráfico. Acertadamente se pregunta Diego Delgado Jara que si en verdad luchan contra las drogas “¿Por qué no combaten el hachís, la heroína y el opio, negocios que, como conoce el mundo entero, manejan sus primos ingleses? ¿Acaso no es sabido que el primer país productor de marihuana del planeta es EE UU, y que sólo California produce cinco veces más que toda Colombia? ¿Por qué no existe un Plan Perú, si en este país existen 900 mil hectáreas de cultivos de coca, en tanto en Colombia menos de 140 mil, según cifras de los propios gobiernos de EE UU y de Colombia? ¿Por qué no existe un Plan México si 70% de la cocaína ingresa desde este país, según una investigación del *New York Times* en base a los archivos de la DEA y el FBI?” (Delgado Jara, 2004: 62).

El Plan Colombia se prolonga en el llamado Plan Patriota, una ofensiva de 18 mil soldados colombianos y 800 estadounidenses, con un costo

de 300 millones de dólares anuales y que para 2005 sólo habría rendido “modestos resultados (Ibarz, 11-5-2005). En diciembre de 2006 el Plan Patriota es sustituido por el Plan Victoria, con un número equiparable de efectivos.

De hecho, el principal favorecido por estos planes es el complejo militar industrial estadounidense, al cual van a parar gran parte de los 750 millones de dólares invertidos en 2002 en dicho plan, que a su vez consume la casi totalidad de los fondos para la llamada Iniciativa Regional Andina. Dichos recursos redundan en beneficio de las grandes corporaciones estadounidenses tales como los contratistas de equipos militares y de defensa DynCorp, United Technologies Corporation, Bell Helicopters y Lockheed Martin. Otras grandes favorecidas por tales erogaciones son las productoras de agentes químicos y biológicos como la Monsanto, artífice de una guerra biológica que no sólo envenena las “siembras ilícitas” de coca, sino también la agricultura colombiana y de los países vecinos. Uno de

sus directores, Robert J. Stevens, es asimismo presidente y funcionario operativo mayor de la Lockheed Martin Corporation. Contra Bolivia se ha articulado un operativo similar, llamado Plan Dignidad, también retoño de la Iniciativa Regional Andina y con idéntico propósito de intervenir militarmente bajo la coartada de la lucha antidroga (Schmitt, 2003).

Según señala Kintto Lucas, es público que Brasil desde un comienzo ha sido contrario al plan Colombia y a la intervención de Estados Unidos en la Amazonia (Lucas, 2005: 40). La potencia militar más poderosa de América Latina y el principal fabricante de armas de la región, por tanto, tiene marcadas diferencias con dicha estrategia interventora estadounidense. Venezuela ha resistido todas las presiones para una involucración, negando la instalación de bases o radares de la potencia nortea, rechazando que sus aviones militares sobrevuelen el país, suspendiendo las actividades de colaboración con la DEA a mediados de 2005.

Pues en realidad el supuesto apoyo a la lucha antidroga es una intervención en gran escala que comprende la erogación inicial de 1.300 millones de dólares para ayuda bélica y en la cual, según denuncia James Petras, el Comando Sur está involucrado en todos los niveles de las operaciones militares y ha entrenado tres “batallones antidrogas de élite para operaciones contrainsurgentes”. Ya que “los cuadros superiores y las Fuerzas Especiales del Comando Sur participan activamente en los campos de batalla, dirigiendo operaciones de combate y coordinando la colaboración militar con los escuadrones de la muerte, tal como se vio en El Salvador, Guatemala y anteriormente en Vietnam. En Bolivia, las Fuerzas Especiales y la DEA actúan en el Chapare, entrenando y construyendo nuevas bases militares.” (Petras, 2002: 35).

Complemento de estos proyectos es el Plan Puebla-Panamá, que abarca la región sur de México y todos los países de Centroamérica. Esta zona geoestratégica reviste extraordinario

valor porque la cercanía entre las costas del Caribe y las del Pacífico la señalan como apropiada para cavar nuevos canales o trazar rutas terrestres que las comuniquen y complementen los servicios del ya insuficiente canal de Panamá, a la vez que como única vía terrestre entre América del Norte y América del Sur, indispensable para el intercambio masivo entre ambas regiones. El Plan comprende una multiplicidad de proyectos de privatización de recursos naturales estratégicos y de desplazamiento de las poblaciones locales. Entre tales planes destaca la privatización del llamado “corredor biológico mesoamericano”, reservorio de una de las biodiversidades más importantes del mundo y lucrativo potencial para las grandes corporaciones estadounidenses del sector biotecnología y agro farmacéutico (Schmitt, 2003).

En Colombia, como en Vietnam, Estados Unidos primero envía asesores, luego manda armamentos, luego combatientes. Hemos visto que a mediados de 1999 presiona diplomáticamente

para involucrar a Panamá, Ecuador, Perú y Venezuela en la contienda. En agosto de 2000 remite la primera cuota de 1.300 millones de dólares como avance de 7.500 millones a ser invertidos esencialmente en armas. El diluvio de equipos militares no decide el conflicto interno pero convierte al gobierno de Pastrana y luego al de Uribe en coloso militar, que desequilibra estratégicamente el área y amenaza la integridad política, económica, social y ecológica de áreas decisivas de los países vecinos: las reservas petrolíferas del Zulia en Venezuela, la Amazonia brasileña, las vertientes del sistema hidrográfico del Putumayo, en Ecuador. El enfrentamiento recrudece. Sufren ruidos quebrantos la economía del país invadido y la del invasor. La población de los escenarios del combate huye hasta rebasar la suma de tres millones de desplazados. Refugiados y perseguidos fluyen hacia las fronteras. Carteles, beligerantes y paramilitares siguen su confrontación dentro de ellas, con fugaces escaramuzas en el exterior. En Colombia, como en Vietnam, Estados Unidos

garantiza que resolverá el conflicto rápidamente, sin peligro para ningún país vecino. Una vez más, sólo lo logrará retirándose.

2006

PARAMILITARES

Paramilitares

En artículo del 25 de enero de 2004 alerté que “el plan maestro de Estados Unidos es que Venezuela le pelee su guerra en Colombia, y que Colombia le entregue el petróleo venezolano”. El 9 de mayo de 2004 Hugo Chávez Frías anuncia en la edición 191 de su programa *Aló Presidente* que en el sector Gavilán del municipio Baruta de la zona metropolitana de Caracas han sido detenidos 130 civiles colombianos con uniformes militares venezolanos, muchos de ellos reservistas, y que más de medio centenar han escapado. Los paramilitares estaban acuartelados en barracas en la hacienda Daktari del autonombrado autor del Plan Guarimba,

el venezolano de origen cubano Robert Alonso, en jurisdicción del alcalde opositor Enrique Capriles Radonsky.

Paragricultores

Un detenido declara ante las cámaras que los reclutaron en Colombia ofreciéndoles 500 mil pesos para sembrar “yuca y plátano” y que llegados a la hacienda les ordenaron que estuvieran “preparados para tomar puntos de la Guardia”. También les intimaron “no dejarnos ver aquí, no mostrarnos ante la gente civil y que si no, nos mataban las familias allá”. Conocían el manejo de armas por ser en su mayoría reservistas, y en días anteriores practicaban con “R-15, pistolas, mini-Uzi” bajo dirección de oficiales venezolanos y de un “instructor que era de la policía, algo así”. Fea cosa, extranjeros disfrazados de soldados venezolanos: o tratan de usurparles funciones, o de culparlos de crímenes propios.

Paramercenarios

¿Qué son los paramilitares? El grado cero de la profesión militar. A diferencia de los guerrilleros, no pelean por un ideal, sino mercenariamente. En contraste con las fuerzas armadas, no operan dentro de un marco institucional. Financiados, protegidos, entrenados y armados por un ejército regular, ejecutan las tareas sucias por las cuáles éste teme ser declarado responsable. Demasiado largo sería el recuento de sus fechorías en la hermana república. Según declara Gloria Gaitán el 12 de mayo para VTV “el paramilitarismo no funciona si no lo está apoyando el ejército”. Sicariato masificado, los paramilitares son brazo de un poder que tira la peña y esconde la mano.

Paramedios

Y no falta quien juegue al escondite, a pesar de que es tan difícil como jugar al apagón comunicacional sin cerrar canal 8. Las televisoras privadas, invitadas a compartir la información, no la difunden. Chávez inserta en *Aló Presidente* una

breve cadena para divulgarla, “pues aquí los que violan el derecho a la información son los canales privados”. El Presidente promete averiguar “hasta dónde estos grupos pudieran haber participado en las guarimbas”, añade que “no tengo la menor duda de que estos grupos están organizándose para intentar el magnicidio”, e informa que el gobernador del Zulia “el golpista Manuel Rosales”, firmante del acta del golpe del 11 de abril, también está formando grupos de paramilitares. Cita una vez más el mandatario a Globovisión, Venevisión, RCTV y a los diarios *El Universal* y *El Nacional*, y precisa que “los propietarios de esos medios de comunicación son enemigos del pueblo venezolano, y ellos le han declarado la guerra al pueblo venezolano, al Ejército venezolano, a la *Constitución* venezolana”.

Parainvisibles

Un paramilitar, por definición, no existe, sobre todo para quien lo maneja. ¿Cómo trata la noticia la prensa del día siguiente? *El Universal*

dedica su primera plana del lunes 10 a noticias deportivas. *El Nacional* titula ese día a 4 columnas de la página A-1: “Detenidos en Caracas 80 irregulares colombianos”. Es interesante el matiz: “irregular” puede ser un buhonero sin licencia. De creerle al antetítulo, “La Policía Metropolitana los interceptó en El Hatillo”, sitio que no está en la jurisdicción de dicha policía, sino bajo la de Polibaruta. El *Daily Journal* rebaja la noticia a un “alegato”: “Chávez allegues coup plot”. *El Mundo* los convierte en víctimas: “Asesinados dos paramilitares”. *BBC Mundo.com* lo llama “supuesto grupo paramilitar en Caracas”, para añadir desdenosamente que “no todos descartan que el grupo pueda ser real, aunque esperan que se suministre más información”. No hay duda: se trata de alegatos, suposiciones, irrealidades: espejismos, fenómenos virtuales. Los invasores se disimulan en el monte gracias al camuflaje; en la ciudad, gracias a los titulares. Apenas *Últimas Noticias* los califica acertadamente en primera plana como “Paramilitares”, y contrasta crítica-

mente las versiones. El día 12 el conductor de “Primera Plana” en Globovisión nos instala en Babia: “Inclusive la matriz de opinión que se ha generalizado es que no son tales paramilitares, es que se trata de un montaje...”

Paradiplomacia

A diferencia de los medios, no cree en montajes la embajadora de Colombia Mariángela Holguín, quien manifiesta que “existe preocupación por la presencia de estos delincuentes en territorio venezolano. Nos alegramos de esta captura, porque es la única forma en la que se va a poder llegar al fondo de estas acciones”. El presidente Álvaro Uribe expresa que “Bien hace el gobierno de Venezuela en capturar a cualquiera que esté delinquiendo en ese país” (*Últimas Noticias*, 10-5-04, p.14). Gloria Gaitán, sin otra investidura que la digna continuación de los ideales de su padre Jorge Eliécer Gaitán, afirma que el plan materializa la “invasión de Colombia a Venezuela” que había denunciado

meses antes. Informa el general López Hidalgo que hay “paras” en siete estados (*Últimas Noticias*, 11-5-04: 12).

Paraoposición

Hay una oposición Jalisco que nunca pierde, y si pierde la arrebatada, y si no arrebatada golpe de Estado, y si no golpea declara guerra, y si no guerra contrata invasión extranjera. Cree implantar un guión donde el dinero produce violencia que produce más dinero. No sabe que prepara el del pueblo. Todas las revoluciones que recuerda la Historia se radicalizaron en la resistencia contra una agresión extranjera.

16-5-2004

EL CINE INSTIGA LA GUERRA CON COLOMBIA

El arte no sólo representa conflictos: puede desencadenarlos. El príncipe Hamlet desenmascara al asesino de su padre haciendo representar delante de él el homicidio de un rey; Shakespeare escenifica una función de Ricardo III de la cual parten en tropel los partidarios de Robert Devereux a intentar el derrocamiento de Isabel I.

En cierto cine sobran instigaciones para asesinar a Colombia, para que nos asesinemos entre nosotros venezolanos y colombianos. Como muestra basten los botones de la estadounidense *Washington, ciudad capital*, interpretada por Peter Fonda; *Daño colateral*, dirigida por Andrew Davis y protagonizada por un Scharznegger más contrainsurgente que nunca, y la venezolana *Punto y*

raya, dirigida por Elia Schneider y estelarizada por un ejército de autoimágenes negativas.

Daño colateral: Terminator IV

La falsa premisa de que los rebeldes colombianos habrían atacado a Estados Unidos trae consigo conclusiones igualmente falaces. La primera es la de que habría que invadir Colombia, como se invadió Afganistán e Irak. La segunda, la de que un político estadounidense que se opone a dicha agresión resulta en la película agente del movimiento guerrillero, por lo cual quien se niegue a asaltar Colombia sería cómplice del terrorismo.

Ante el incomprensible retardo de Estados Unidos en declararle la guerra a Colombia, Schwarzenegger la invade personalmente. Según la infecta versión de Davis, nada más adecuado: todos los neogranadinos traficarían cocaína: algunos ostentarían el mérito adicional de corromper menores. El líder guerrillero El Lobo mata subordinados cuando lo contradicen o co-

meten el más mínimo error, y obliga a uno de ellos a tragarse una serpiente de coral.

Con el humanitario propósito de liberar a Schwarzenegger, helicópteros estadounidenses calcinan todo ser viviente varios kilómetros alrededor de la granja en el Chocó donde estaba prisionero, y al encontrarlo vivo, alegan que lo han hecho para liberar a un “gran norteamericano”. El espectador debe inferir que los estadounidenses ya están interviniendo como fuerza militar en Colombia: no proporcionando fondos, equipos ni entrenamiento, sino como combatientes. Y en efecto, al poco tiempo sucede en la realidad. Los “asesores” pasan a combatientes, y éstos a genocidas.

Añadamos que, liberado Schwarzenegger, sus compatriotas en lugar de retirarse de la hermana República prosiguen su triunfal tarea de calcinarla con napalm. Este maratón de atrocidades físicas culmina con una inigualable infamia moral: el hijo de un guerrillero corre a abrazar al Terminator estadounidense que acaba de matar a su pa-

dre y a su madre. Gracias por favor recibido. Tal es la reacción que, según Washington, tendrán los infantes colombianos que sobrevivan ante una intervención que liquide a la generación adulta. Para allá vamos.

Washington, Ciudad Capital

Similar artimaña de presentar la guerra con Colombia como hecho consumado aplica *Washington, ciudad capital*, protagonizada por Tom Berenguer, Lesli Bibb y Peter Fonda. En el infame libreto, un supuesto narcotraficante llamado Guámez atacaría la embajada de EEUU en Colombia. El presidente estadounidense, sin consultar al Congreso y en premeditada contravención del Acta de Poderes, barre con napalm Colombia. Durante la agresión la guerrilla derriba un bombardero estadounidense y su piloto muere. El público debe inferir que es práctica normal responsabilizar a todo un país por el acto de uno de sus nacionales, y que por tal razón Estados Unidos está ya en plena guerra directa

contra Colombia. Y es lo que efectivamente sucede años después de estrenada la infame cinta, cuando más de 800 soldados estadounidenses participan como combatientes en el llamado Plan Victoria, que sucede al Plan Patriota, que sigue al Plan Colombia, a los cuales seguirá la ruina de la República Hermana.

Punto y Raya

Cuando los aparatos ideológicos estadounidenses tienen catarro, los nuestros contraen tuberculosis. Si sus cintas *Daño Colateral* y *Washington, ciudad capital* proponen que Estados Unidos invada Colombia, la venezolana *Punto y raya*, dirigida por Elia Schneider, sugiere que venezolanos y colombianos le ahorremos esa molestia matándonos entre nosotros.

Para cosechar esta tempestad, nada como una buena siembra de estereotipos. Dos reclutas representan, suponemos, a los países en conflicto: el venezolano es enganchado a la fuerza por autoridades cansadas de encarcelarlo por ladrón;

también es tramposo, cobarde, adicto, y para mejor ajustarse al racismo con el cual ciertos medios definen a las “turbas”, por lo menos en el guión de Henry Herrera, negro. Quizá para no provocar el prejuiciado rechazo en su público potencial, en la película el actor es menos moreno.

El recluta colombiano deja su escondida granja para presentarse voluntario, movido sólo por el ideal de servir a su patria; es honrado, desinteresado, fiel a su novia y en consonancia con tantas virtudes, blanco. Debe tratarse del hermanito menor de Pablo Escobar Gaviria.

Tras equívocas escaramuzas, los chamos pierden contacto con sus contingentes y trataban de sobrevivir juntos. En este feliz contubernio descubren dos supuestos hechos que ni pintados para justificar la intervención que predicán las películas estadounidenses: Venezuela sería una inmensa base de las FARC, y todas las autoridades de ambos países estarían empantanadas en el narcotráfico.

Tras estas convenientes lecciones, los reclutas se reintegran a sus respectivos ejércitos a tiempo para escuchar a sus respectivos presidentes declarar la supuestamente inevitable guerra entre Venezuela y Colombia, y empuñan las armas desde bandos opuestos.

Punto y raya toma su nombre de un hermoso poema contra las fronteras escrito por Aníbal Naoza, quien sin duda se hubiera espantado de esta representación estereotipada de dos países hermanos y de la presentación de un conflicto fratricida entre ellos como hecho consumado. Cierta cine se pasa de la raya: corresponde a los espectadores mantenernos en ella.

23-1-2005

COLOMBIA: CRÓNICA DE UNA GUERRA ANUNCIADA

1

En la extensa frontera con la hermana república se repite con regularidad un incidente. Desconocidos matan alevosamente soldados venezolanos. Medios de comunicación asesinan la veracidad inventando que Venezuela invade territorio colombiano. Colombianos se preparan para la agresión imaginaria. Parece el cuento de Juanito Matagigantes, quien logra que dos colosos se maten haciendo que cada uno crea que el otro lo ataca. ¿Exagero? Por lo menos en dos ocasiones, los medios de comunicación han anunciado como hecho una inexistente invasión de Venezuela contra Colombia.

2

Así sucedió con la matanza de Cararabo a principios de los años noventa. Los parlamentarios socialcristianos Humberto Celli y Haydee Castillo de López Acosta propusieron una “persecución en caliente” Colombia adentro. Yo estaba en Bogotá cuando los medios tomaron la infeliz propuesta como declaratoria de guerra formal. Poco faltó para que buena parte de los neogranadinos corrieran a alistarse contra una invasión inexistente.

3

La historia vuelve a repetirse. Desconocidos asesinan ocho guardias fronterizos venezolanos. El gobernador del norte de Santander, Luis Miguel Morelli Navía, cursa a Bogotá denuncias de una supuesta incursión de militares de Venezuela en Tibú. El 3 de enero el coronel Fernando Fernández, jefe del Estado Mayor del Comando Regional N° 3 declara falsas las versiones de la prensa colombiana de que efectivos de la GN hubieran penetrado en el poblado de Vereda de

San Luis de Beltrán. El canciller Chaderton declara explícitamente que no ha habido persecución en caliente. Salvo, quizá, en la imaginación de los medios.

4

La imaginación, como la calumnia, es perezosa y sólo se mueve por intereses. ¿Le interesa a Venezuela un conflicto con Colombia? Nuestra población apenas alcanza 24 millones: la de Colombia sobrepasa cuarenta. Cerca de dos millones de colombianos viven en Venezuela, y casi ningún venezolano en Colombia. La hermana república lleva medio siglo de entrenamiento militar en conflictos internos, Venezuela lleva tres décadas de paz. Colombia no tiene puntos estratégicos vitales, Venezuela tiene muchos. La producción agrícola neogranadina es difícil de paralizar, la petrolera de Venezuela es sumamente vulnerable. Colombia tiene fértiles tierras que no codiciamos. Venezuela detenta el botín más codiciable: los hidrocarburos de los que depen-

de el destino del mundo. El gobierno neogranadino es aliado de Estados Unidos, el nuestro no. Razones geopolíticas, estratégicas, económicas, morales e históricas justifican la política del gobierno venezolano de no inmiscuirse en el conflicto, guardar estricta neutralidad y acoger humanitariamente los desplazados de ambos bandos.

5

¿Le interesa a la dirigencia colombiana la guerra con Venezuela? Toda oligarquía que se tambalea inventa un conflicto externo para consolidar el frente interno. Usualmente fracasa, como los militares argentinos que tomaron las Malvinas. Toda oligarquía que necesita apoyo de Estados Unidos sacrifica a sus compatriotas como carne de cañón contra un gobierno molesto para los estadounidenses. Usualmente le pasa como a Sadam Hussein, armado hasta los dientes por Estados Unidos para fustigar a Irán, y luego aniquilado por los propios estadounidenses.

6

¿A quién le interesa entonces un conflicto entre Colombia y Venezuela? En el número del último trimestre de 1999 de la revista del Departamento de Estado *Foreign Policy* figura un artículo de David Henríquez, investigador del Centro Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de Harvard, quien afirma que “el objetivo de la mayoría de las guerras actuales es hacer a los países más pequeños, no más grandes”. Sostiene además que regiones ricas como el norte de México, el sur de Brasil o la ciudad costera de Guayaquil se preguntan qué beneficio perciben de sus actuales identidades nacionales. Posteriormente, los medios anuncian otro plan en marcha para arrebatarle la Patagonia a Argentina. Señalamos que en 1998 la prensa de Colombia realizó encuestas sobre un plan para dividirla en dos países, uno dominado por el gobierno y otro por la guerrilla; y que el año inmediato los medios difundieron otro proyecto para secesionar el Zulia, la provincia petrolera más rica de Vene-

zuela. Está pendiente otro plan más para independizar Guayana. Estos complots separatistas representan para los imperios la ventaja adicional del enriquecimiento por tráfico de armas, la apertura de nuevas aventuras intervencionistas y la posibilidad de imponer draconianas condiciones diplomáticas y económicas a cada fragmento separado.

7

El plan maestro de Estados Unidos es que Venezuela le pelee su guerra en Colombia, y que Colombia le entregue el petróleo venezolano. ¿Qué resultados tendría una guerra entre nuestras repúblicas hermanas? La destrucción de una generación de colombianos y de venezolanos. La ruina de ambas economías. La caída de las dirigencias que atizaran el conflicto. Con los escombros de ambos países se edificaría la verdadera meta de la contienda: Estados Unidos intervendría para crear un nuevo Estado petrolero, integrado por el Zulia y parte del Departamento

Norte de Santander. Un nuevo Kuwait, con casi todo el petróleo del hemisferio y casi ninguna soberanía. Gerónimo Pérez Rescaniére gusta de repetir que Colombia iba a ser el país más rico de Latinoamérica porque tenía a Panamá, y que secesionado Panamá, no fueron ricos ni Panamá ni Colombia. Tras un nuevo desmembramiento, no serían ricos ni Venezuela, ni Colombia, ni el Estado secesionado.

8

Advierte el canciller Roy Chaderton a la consejera estadounidense Condoleeza Rice: "si abriga la ingenua pretensión de poner a pelear a venezolanos con colombianos, le aseguramos que no existe poder capaz de lograr ese objetivo" (*Últimas Noticias*, 14-1-04: 10). Que así sea.

25-1-2004

PERSECUCIÓN EN CALIENTE

Nos aflige la pérdida de vidas en el puesto fronterizo de Cararabo; nos alarma la reacción de nuestros estrategas de cafetín, convertidos en oráculos por obra y gracia de algunos medios de comunicación.

Repasemos las prendas de esta quincalla guerrerista, comenzando por la de hacer responsable al gobierno de Colombia por los actos de los enemigos del gobierno de Colombia. Sería tanto como culpar a la administración venezolana de los delitos cometidos por Carlos en el exterior. Hasta donde yo sé, el enemigo de mi enemigo es mi amigo: deberíamos decidir si nuestro oponente es el gobierno de la hermana República o los irregulares que operan en ella;

sería suicida que nos hiciéramos adversarios al mismo tiempo de los dos.

Capítulo aparte es el de exigir al gobierno de Colombia que pague indemnización por los daños causados por sus enemigos. Según esa lógica, también debería el gobierno venezolano cancelar reparaciones a todo damnificado por sus adversarios, desde delincuentes hasta guardianes negligentes de depósitos de combustible o perforadores de tubos de gasductos. Siguiendo tal argumentación, Prusia, Inglaterra e Italia bloquearon las costas venezolanas en 1902 para cobrarle al gobierno de Cipriano Castro los daños causados... ¡por insurrectos contra el propio don Cipriano! De ser válida la excusa, todavía estaríamos bloqueados. Cierto que Francia, Prusia y Alemania pagaron en su tiempo indemnizaciones de guerra, pero por daños causados por sus tropas regulares y, detalle interesante, después de ser respectivamente derrotadas en la guerra franco-prusiana y en la primera y segunda guerras mundiales. Tales

conflictos costaron más que las indemnizaciones; mejor que no hubieran existido ni los unos ni las otras.

Pero, ¿qué decir del broche de oro con el cual cierra el debate el estratega Humberto Celli, quien propone invadir la frontera colombiana hasta 50 kilómetros en “persecución caliente” de los irregulares? Para calificarla baste decir que la apoya la inefable Haydee Castillo, Mamá Grande de la Deuda Pública venezolana y Hada Madrina de la pena de muerte. Suponemos que ambos genios de la diplomacia conocen el significado de la palabra “reciprocidad” o sea: lo que es igual no es trampa. Ello quiere decir que mientras los belicosos Celli y López Acosta se lancen bayoneta entre los dientes a exterminar a los cinco ejércitos guerrilleros de Colombia en el eje Cararabo-Maporillal, bien podrían las Fuerzas Armadas Colombianas iniciar una “Hot Pursuit” de encapuchados venezolanos en el triángulo Mai-cao-Maracaibo-El Tablazo. Y ya que este tipo de operaciones reduce el concepto de “frontera” al

de antigualla sin sentido, ¿Por qué respetar entonces un impráctico límite de 50 kilómetros? ¿Por qué no convertir la “persecución caliente” de encapuchados venezolanos por parte del ejército colombiano en “búsqueda candente” por la prolongación Cabimas-Punto Fijo-Maracay o la troncal Barquisimeto-Petroquímica de Morón-Caracas o el corredor estratégico Faja Petrolífera-Siderúrgica-Guri? Mejor ni pensarlo. Como decía Napoleón, Dios favorece a los grandes batallones; ojala nunca aprendamos por experiencia propia que las fronteras borradas privilegian a los ejércitos mayores.

Terrible dolor por la muerte de nuestros soldados; mal asunto que apenas acabada la guerra preelectoral Fujimori-Ecuador los medios de comunicación oficiales hagan soplar vientos de Malvinazo, maquiavélico recurso de todo gobierno que quiere desviar contra un enemigo externo el malestar social. Grave es que la Nación venezolana haya perdido durante algunas horas el control del puesto fronterizo de Cararabo;

gravísimo resulta que se haya dejado arrebatar, quizá para siempre, el control sobre sus comunicaciones, sus acueductos, sus líneas aéreas y navieras y sus industrias básicas. Muchas más cosas se nos han perdido dentro de nuestras fronteras, que fuera de ellas ¿Qué tal si demostramos nuestro patriotismo iniciando una persecución caliente para devolverle a Venezuela todas estas instalaciones estratégicas, sin las cuales no puede ejercer su soberanía?

Marzo de 1995

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
LA PAZ CON COLOMBIA.....	5
VENEZUELA INVADIDA.....	11
NO ME IMAGINO AL PRESIDENTE CHÁVEZ PROMOVIENDO CASINOS	11
¿MISIÓN CASINO ADENTRO?	25
PARAMILITARES, PARAPOLÍTICA, PARABINGOS, PARACASINOS	31
¿BINGOS Y CASINOS SON NUESTRAS PRIMERAS NECESIDADES?	41
LA INTERVENCIÓN DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA.....	47
Conversión del ejército en policía antidrogas	47
Constitución de fuerzas interamericanas de intervención	47
Intervención disfrazada de ayuda	53
PARAMILITARES.....	65

Paramilitares	66
Paragricultores	65
Paramercenarios	66
Paramedios	67
Parainvisibles	68
Paradiplomacia	70
Paraoposición	70

**EL CINE INSTIGA LA GUERRA
CON COLOMBIA 73**

Daño colateral: Terminator IV	74
Washington, Ciudad Capital	76
Punto y Raya	77

**COLOMBIA: CRÓNICA
DE UNA GUERRA ANUNCIADA81**

PERSECUCIÓN EN CALIENTE 89

